

La coordinación represiva argentino-uruguaya en Buenos Aires entre 1973 y 1977: el caso de los militantes uruguayos del Partido por la Victoria del Pueblo

Pablo Matías Lescano¹

Resumen

En la actualidad existe una literatura abundante acerca de la represión transnacional, conocida como Operación Cóndor, desarrollada por las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas del Cono Sur en la segunda mitad de la década de 1970. Sin embargo, consideramos que todavía hay aspectos que nos llaman a repensar y complejizar la cuestión de la coordinación represiva: ¿se puede hablar de la existencia de este fenómeno en la región antes de Cóndor? ¿Qué formas adoptó?

La existencia de modalidades interestatales de represión denominadas entendimientos bilaterales o “acuerdos de caballeros”, operaron como los cimientos sobre los que se erigió la compleja infraestructura operativa de Cóndor y su accionar, institucionalizada a fines de 1975. En este sentido, el ejemplo del Operativo Gris que tuvo lugar en Buenos Aires en 1974 -en donde un centenar de uruguayos fue detenido cuando se celebraba un acto de repudio a la dictadura uruguaya a un año del Golpe de Estado-, sirvió como una aproximación sobre la cual se desarrolló la coordinación represiva llevada adelante por los gobiernos argentino y uruguayo en torno a los exiliados uruguayos que conformaron el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en Argentina, en el marco de la Operación Cóndor.

Palabras claves: Coordinación represiva – Argentina – Uruguay - Operación Cóndor – Partido por la Victoria del Pueblo

¹ Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Sociales lescanopablo.28@gmail.com

La coordinación represiva argentino-uruguaya en Buenos Aires entre 1973 y 1977: el caso de los militantes uruguayos del Partido por la Victoria del Pueblo

La presente ponencia reúne las primeras aproximaciones y reflexiones en torno a un proceso de investigación en curso, el cual se inscribe en la realización de la tesis para la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires.

En este sentido, el presente trabajo busca, a través del abordaje de un estudio de caso como lo es el de los exiliados uruguayos que conformaron el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), trazar una aproximación acerca de cómo se desarrolló la coordinación represiva argentino-uruguaya en Buenos Aires, entre 1973 y 1977. ¿De dónde procedían políticamente estos exiliados? ¿Por qué eran una amenaza para ambos gobiernos? ¿Cómo se llevó adelante el intercambio de información entre los aparatos de inteligencia de ambos Estados? ¿Qué metodologías represivas se aplicaron sobre ellos?

En contexto

Hacia mediados de los años cincuenta del siglo XX comenzó a revertirse la relativa prosperidad económica que Uruguay conocía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto se debió a la finalización de una coyuntura externa que había sido favorable durante el decenio anterior, lo cual dio como resultado el crecimiento de una industria de bienes suntuarios y una cierta mejora en el nivel de vida de los sectores asalariados y las capas medias en general. La crisis se manifestaba a través del agotamiento de una industria protegida -que había resultado viable hasta la recuperación de los mercados europeos y la ocupación del lugar de potencia mundial hegemónica por parte de Estados Unidos-, del estancamiento del sector agropecuario y de la expansión de la actividad especulativa por parte de varios grupos sociales. Esto generó un clima de tensión social que fue leído por los contemporáneos como una crisis de carácter estructural, en donde se debía lograr un nuevo modelo de país, empresa en la que se van a embarcar viejas y nuevas corrientes de pensamiento que abarcaban la totalidad del espectro ideológico (Broquetas; 2013: 45-46).

Al mismo tiempo, se le sumó otro acontecimiento relevante que no pasará desapercibido para la vida política uruguaya: la revolución cubana en 1959. Por lo cual, si bien desde el inicio de la Guerra Fría Uruguay se había mantenido alineado a la órbita estadounidense y había sido permeable a las manifestaciones de anticomunismo de ese país, esta relación se profundizó, manifestándose en asistencia financiera y tecnológica a los brazos represivos del Estado.

Así, la década de 1960 va a iniciar con un gran auge de movilizaciones sindicales y estudiantiles, acompañadas de una intensa actividad política, las cuales encontrarán como respuesta por parte del gobierno una escalada represiva. La cual estará cobijada por la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). De esta forma, en medio del conflicto que enfrentaba a Estados Unidos y la Unión Soviética, se procedió a trazar una división internacional del trabajo en materia de seguridad: “la principal misión de los militares latinoamericanos era el combate a los “enemigos internos” –las llamadas “quintacolumnas del comunismo internacional”- que operaban, según decían los teóricos de la DSN, en el interior de cada país, dejando la lucha contra el enemigo exterior –el bloque de la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia, y China Popular- a las fuerzas de la OTAN.” (Ansaldi y Giordano; 2012: 410).

La puesta en marcha de la DSN en Uruguay se pudo ver expresada adentrándonos en la década de 1970. En 1971 se celebraron elecciones y triunfó el oficialismo con Juan María Bordaberry. Pero en este escenario apareció una nueva fuerza política: el Frente Amplio, que

nucleó sectores de izquierda, progresistas y demócratas cristianos. Ante esta situación, en junio de 1973, el Parlamento suspendió las garantías individuales y votó el estado de guerra interna. La represión se tornó sistemática, persiguiendo a toda forma de oposición política o sindical. Al poco tiempo, se creó el Consejo de Seguridad Nacional, se terminó por disolver tanto el Parlamento, se censuraron varios periódicos opositores y se ilegalizaron todas las expresiones políticas progresistas. Este “golpe en cámara lenta” aplicó el terrorismo de Estado y dejó un saldo de miles de encarcelados, torturados y exiliados (Garzón; 2016: 34).

El Partido por la Victoria del Pueblo, una historia: del anarquismo a la fundación del partido

De acuerdo a la Investigación Histórica sobre los detenidos-desaparecidos y asesinados políticos llevada adelante por la Universidad de la República de Uruguay, el PVP, fundado en el exilio en Argentina en 1975, comparte orígenes y antecedentes históricos con la Federación Anarquista del Uruguay (FAU), la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y la Organización Popular Revolucionaria (OPR-33).

En octubre de 1956 se había fundado la Federación Anarquista del Uruguay, la cual tenía en sus inicios una clara influencia de la tradición revolucionaria de Bakunin y Malatesta. Sus militantes procedían de sindicatos de tendencia anarquista, de sectores juveniles y estudiantiles entonces agrupados en las Juventudes Libertarias.

Sin embargo, no se mantuvo indiferente a lo que sucedía en Latinoamérica por ese entonces, especialmente en lo que respecta a la revolución cubana. Esta última actuó como catalizador de debates que se venían desarrollando previamente, provocando rupturas, fundaciones, nuevas alianzas, o coordinaciones, en el plano político. De esta forma, ninguna de las tres corrientes tradicionales de la izquierda uruguaya (socialistas, comunistas y anarquistas) salió ileso de estos debates. Así es como en 1960 se produce una escisión interna y termina prevaleciendo la posición de quienes declaran un apoyo crítico al proceso que se había iniciado en Cuba en 1959, frente a quienes sostenían el avance del centralismo, el estatismo y el autoritarismo en la isla.

Otros acontecimientos para resaltar en este contexto son los siguientes: a mediados de la década de 1960 los sectores asalariados habían conseguido unificarse en torno a la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) –con importante presencia anarquista en distintos gremios- y desde 1962 el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) presionaba como guerrilla urbana para mejorar las condiciones sociales y económicas de la población.

En 1967, una reforma constitucional que fortaleció la figura presidencial permitió al entonces jefe del ejecutivo, Jorge Pacheco Areco, iniciar un proceso de concentración de poderes que derivaría en una dictadura. Durante el “pachequismo” se intensificó la represión a militantes políticos y sindicales de izquierda, y se combatió a los Tupamaros. La escalada represiva contra el movimiento popular se manifestó en asesinatos de estudiantes y trabajadores, en los secuestros y torturas por parte de los Escuadrones de la Muerte, en atentados contra locales políticos y en cientos de detenidos –muchos de estos formarán parte del PVP a la posterioridad- por la aplicación de las medidas de pronta seguridad² como una forma de intentar neutralizar la capacidad de lucha que se generaba a partir de la unidad del sindicalismo. Estas medidas se encontraban en el texto constitucional, más precisamente en el inciso 17) del artículo 168: “Tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o

² Fueron aplicadas por primera vez en 1951. En 1967 se aplicaron entre el 10 y el 23 de octubre. Pero a partir de 1969 de forma ininterrumpida, incluyendo la dictadura militar.

conmoción interior (...) En cuanto a las personas, las medidas prontas de seguridad solo autorizan a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del territorio, siempre que no optasen por salir de él.”³Pacheco combinó esta estrategia represiva con una política económica regresiva que eliminó las convenciones colectivas de trabajo.

Así las cosas, en diciembre de 1967 un decreto presidencial dio lugar a la clausura del diario “Época” (que agrupaba a las distintas corrientes de izquierda uruguayas) y a la disolución de la FAU, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), el Movimiento Revolucionario Oriental (MRO) y el Partido Socialista (PS). Esta nueva situación de clandestinidad llevó a una necesaria reorganización de quienes conformaban la FAU. De esta manera, a fines de 1968 nació la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE), ampliando el campo de acción de la FAU a nivel popular y sindical. Entre sus impulsores y principales dirigentes se destacaron: León Duarte, Gerardo Gatti, Mauricio Gatti, Juan Carlos Mechoso, Washington Pérez, Hugo Cores, Miguel Gromaz y Raúl Cariboni.

Cerrando el círculo de las organizaciones que posteriormente conformarán el PVP en Argentina, diremos que a mediados de julio de 1969, el aparato armado del FAU, conocido con el nombre de “Chola”, robó del Museo Histórico Nacional la bandera original de los 33 Orientales. En las paredes del museo se pintó una “R” encerrada en un círculo y se firmó: “Los 33”. Es a partir de este momento que comenzó a denominarse Organización Popular Revolucionaria “33 Orientales” (OPR -33).

¿Por qué resultaban tan peligrosas y amenazantes estas organizaciones a la vista de los distintos gobiernos uruguayos que se fueron sucediendo?

Hacia 1972 el MLN-T había sido derrotado militarmente y desarticulado mediante la represión estatal. Sus principales dirigentes se encontraban encarcelados en penales de máxima seguridad. Por lo tanto, la guerrilla no representaba ya un peligro para las autoridades uruguayas. Pero lo que sí constituía una era un movimiento sindical cohesionado, que se había organizado en torno a una central unificada y que venía probando su potencia desde el decenio anterior. Interfiriendo con los planes económicos que se tenía para Uruguay: la aplicación de un modelo neoliberal.

El diagnóstico elaborado por los tecnócratas neoliberales consideraba que los principales problemas de la economía uruguaya eran dos: el estancamiento y la inflación. Para combatirlos elaboraron un año antes del golpe de Estado un Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el período 1973-1977. Sus propuestas eran: “una política monetaria restrictiva (aumento de la tasa de interés), una política salarial de contención (desindexación de los salarios, vinculándolos exclusivamente a las variaciones de la productividad), una política fiscal orientada a la reducción del déficit de las cuentas públicas, y una política cambiaria “realista” (vinculada a la defensa de la competitividad externa del sector exportador) para combatir la inflación. Para superar el estancamiento se postulaba una estrategia de dinamización de la economía basada en la iniciativa privada (repliegue estatal, fin del proteccionismo arancelario y los subsidios), la apertura comercial y financiera al exterior, la inversión extranjera directa y las exportaciones de productos agropecuarios tradicionales” (Yaffe; 2010: 1-2).

Entonces, los sindicatos con su tradición de lucha, movilización y autonomía, no tenían lugar en este esquema, tanto es así que la dictadura ilegalizó a la CNT. Sobre todo teniendo en cuenta cuál era su proyecto, en palabras del sindicalista Gerardo Gatti, uno de los miembros fundadores del PVP a la posterioridad: “El hecho de haber dado forma a la CNT y de mejorarla hasta darle una consolidación orgánica como centro único de dirección o de coordinación sindical

³ Constitución Nacional de la República Oriental del Uruguay, 1967. Artículo 168, inciso 17).

no representa de por sí el *desiderátum* (la itálica corresponde a los autores). Ello posibilita una acción de unidad de toda nuestra clase frente al enemigo interior y exterior, para derrotarlo. Por eso es importante. Esa unidad para funcionar depende de la lucha (...) Utilizar esa unidad para lograr los cambios que el país necesita, teniendo a los sindicatos como promotores y a los trabajadores como protagonistas...” (Rodríguez y Trías; 2013: 99).

En efecto, cada una de las organizaciones que van a terminar dando lugar al PVP tenían una presencia sumamente importante en el mundo sindical y universitario. Por ende, formaban parte de este ciclo de movilizaciones que enmarcaba a Uruguay por estos años. Para ello, había una división entre lo que se consideraba como el sector de “masas” –quienes se encontraban en los distintos sindicatos, organizaban y formaban parte de las jornadas de protestas, vinculados a la ROE- y el sector “armado” –con pertenencia a la OPR 33, que no tenía una tendencia guerrillera y foquista, sino que llevaba adelante ciertas acciones de apoyo para garantizar que la actuación del sector de masas tuviera éxito-.

Precisamente, la ROE tuvo una participación activa durante la huelga general declarada por la CNT ni bien se produjo el golpe de Estado en Uruguay en 1973. Su dirección estuvo integrada por José Charlo, Hugo Cores, León Duarte, Jorge Zaffaroni y Mariela Salaberry. Este accionar no pasó desapercibido para los servicios de inteligencia uruguayos, como bien lo muestra el siguiente informe del Servicio de Información y Defensa del Ejército (SID): “La totalidad de los militantes del Sector de Masas (ALEJANDRA) y los militantes de la R.O.E. participan activamente en las ocupaciones de fábricas que se dan cuando la Huelga. Además se participa y se dirigen, todo tipo de acciones callejeras que hay en esos días. Al finalizar la huelga se realizan varios atentados con bombas preparados por la Organización y de la ROE. Son, casi todos ellos firmados “RESISTENCIA VENCERÁ.”⁴

Previamente a que se consumara el golpe de Estado en Uruguay, en marzo de 1973 habían sido detenidos en Montevideo varios miembros de la dirigencia de la FAU, entre los que se encontraban Juan Carlos Mechoso y Raúl Cariboni; al mismo tiempo, fueron cayendo militantes y locales lo que generó problemas de comunicación entre quienes quedaron en libertad. Al mes siguiente, el Secretariado de la FAU publicó un documento llamado “Acta de Abril” donde se expresó la decisión de organizar un repliegue enviando a varios cuadros de la organización a Buenos Aires. Después de la huelga, varios militantes de la FAU, la OPR 33 y la ROE se encontraban detenidos, otros continuaron con tareas de militancia en forma clandestina en Uruguay y otros también atravesaron el Río de la Plata con destino a Argentina: ¿cuál era la situación política allí?

Argentina: entre la primavera y la Triple A

Luego de dieciocho años de proscripción, el peronismo resultó triunfante en las elecciones que se celebraron en marzo de 1973. Tras la breve presidencia de Héctor Cámpora, Juan Domingo Perón fue elegido presidente nuevamente, acompañado por su esposa María Estela Martínez como vicepresidenta. Perón murió en julio de 1974 y lo sucedió su mujer. El gobierno de Martínez de Perón estuvo signado por el crecimiento de la violencia y la aparición de una fuerza parapolicial (la Alianza Anticomunista Argentina o Triple A).

⁴Junta de Comandantes en jefe, Servicio de Información de Defensa, Departamento III (Planes – Operaciones-Enlace). Mesa de Inteligencia Asunto 8.2.1. 108. Setiembre de 1976. En: DNII. Bulto 96. Ver: Actualización de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. Sección II. Cronología documental y anexos. Partido por la Victoria del Pueblo. Acceso: www.presidencia.gub.uy/comunicacion/informes/investigacion-historica-sobre-detenidosdesaparecidos

Esta organización, formada por el ministro de Bienestar Social José López Rega y al mando del comisario Alberto Villar, jefe de la Policía Federal, perpetró atentados y asesinatos contra obreros sindicalizados, dirigentes villeros, médicos, abogados, estudiantes y políticos. Una vez consumado el golpe de Estado de 1976, muchos de sus miembros formaron parte de los grupos de tareas con los que la dictadura privaba ilegalmente de la libertad a las personas, las torturaba y las hacía desaparecer. Cabe señalar al respecto que la Triple A actuaba en un marco de acción mucho más amplio, constituyéndose en una de las piedras angulares de la coordinación represiva a nivel regional previa a la formalización de la Operación Cóndor. Pero para comprender este fenómeno, no hay que perder de vista la situación internacional y regional.

De acuerdo a ello, Estados Unidos estableció como un objetivo de control a su “patio trasero” latinoamericano –conforme a intereses geopolíticos derivados de la Guerra Fría- y en este esquema, la Operación Cóndor cumplió un rol fundamental.

Sin embargo, respecto de ella se debe señalar lo siguiente: si bien la entendemos como “un acuerdo multilateral entre las dictaduras de seguridad nacional del Cono Sur dentro del sistema continental de contrainsurgencia promovido por los Estados Unidos” (Garzón; 2016: 83), sostenemos que no inauguró la política represiva en la región. Previamente a que Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, en noviembre de 1975, firmaran un documento que permitía a sus fuerzas de seguridad coordinar la represión contra los exiliados políticos del Cono Sur por fuera de sus fronteras nacionales, ya se venían desarrollando lazos previos de coordinación represiva entre los gobiernos de la región, denominados entendimientos bilaterales o “acuerdos de caballeros”. Los cuales operaron como los cimientos de lo que luego sería la compleja infraestructura operativa de Cóndor y su accionar. En otras palabras, a lo que dio lugar la firma de ese acuerdo es a una aceleración de tendencias históricas de coordinación represiva que ya existían, a jerarquizarlas, sistematizarlas y permitir que las partes, que ya tenían relaciones previas, pudieran confluír en una forma más estructurada de actuación.

Antecedentes de la Operación Cóndor en el Río de la Plata

En enero de 1974 se desarrolló en Buenos Aires una reunión de coordinación represiva en la que se puede constatar la asistencia del comisario Villar (representando a Argentina), un general de Carabineros chileno, un representante boliviano y el inspector Víctor Castiglioni, jefe de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) uruguaya. Gracias al ejemplar de “El Auténtico” del 10 de diciembre de 1975 se pueden observar fragmentos de la versión taquigráfica de aquella reunión.

En efecto, el general de Carabineros propuso: “Primera Ponencia, acreditar en cada embajada un Agregado de Seguridad, que pueda ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía (...) Segunda Ponencia, en forma similar a lo que tienen Interpol en París, tener también nosotros una Central de Informaciones (...) Tercera Ponencia, intercambios programados e imprevistos de personas (...) que podamos llegar directamente con toda confianza a cualquier de los organismos de Seguridad de cualquiera de los países, y exponer a qué venimos, que no necesitemos previamente una invitación formal (...) Cuarta Ponencia, la necesidad de establecer un canal de comunicación...”⁵

La intervención de Castiglioni, consistió en lo siguiente: “Lo que yo iba a proponer ya está comprendido en lo que ha expuesto el señor general de Carabineros. Particularmente, reiteraríamos el ofrecimiento que ya hemos hecho de mantener acá en forma permanente uno o

⁵ Rodríguez, Miguel Ayala: El Auténtico. Expresión del peronismo auténtico para la liberación nacional y social. Año 1. N° 7. Buenos Aires, 10 de diciembre de 1975. Págs. 4-5.

más funcionarios sobre todo en zonas críticas, como el Litoral, colaborando con la policía argentina a efectos de identificar gente”⁶, mientras que Villar por el lado argentino completó: “No hay ningún problema. El jefe del DAE (Departamento de Asuntos Extranjeros de SSF) luego va a tomar contacto con el Inspector General Castiglione, para coordinar bien esos enlaces. Lo mismo Chile, si necesita tener gente en la zona de Mendoza, San Juan o la zona que se determine, como asimismo Bolivia en el caso de Salta, Jujuy...”⁷ Los cimientos de lo que luego terminaría siendo la Operación Cóndor ya se encontraban fijados y la coordinación represiva rioplatense en Buenos Aires se iba a poner a prueba ese mismo año.

El 19 de abril de 1974 se realizó un acto público en repudio a la dictadura uruguaya en el local de la Federación de Box en Argentina. Allí se convocó a un próximo encuentro, que se realizó el 2 de junio, en las vísperas de cumplirse un año del golpe de Estado en Uruguay. Esta reunión se llevó a cabo en la calle México donde concurrieron 101 uruguayos. La Policía argentina -División Extranjería-, detuvo a todos los asistentes, quienes fueron fichados y algunos también procesados y condenados a un mes de prisión. A este operativo se lo denominó “Operativo Gris”, y fue documentado por parte de los servicios de inteligencia, constituyendo una importante base de datos con vistas al corto plazo.

Entre los nombres y datos obtenidos de los distintos documentos de la llamada “Operación Gris” sobresalen los siguientes: Michelena, María de los Ángeles; Cuadros de Strauch, Ana Inés; Prieto González, Ruben; BelliziBellizi, Andrés Humberto; Errandonea Salvia, Juan Pablo; LópezBurgos, Luis Alberto; Inzaurrealde Melgar, Gustavo Edison. Ello permitirá una actualización de la información que se usará a la posterioridad para los operativos de represión que se desarrollarán en Buenos Aires.

El vuelo del Cóndor cubre todo el Cono Sur

El año 1975 resultaría ser crucial en muchos sentidos. Después de un año de reuniones clandestinas, discusiones de documentos y esfuerzos organizativos, en julio se realizó el congreso fundacional, llevado adelante en la clandestinidad, que dio origen al PVP. En el siguiente fragmento de las resoluciones que se leyeron en el congreso se pueden ver condensadas las propuestas del naciente partido político: “Frente al callejón sin salida al que la dictadura cívico militar ha llevado a nuestro país y a la agresión armada que ha lanzado sobre nuestro pueblo llamamos a todos los orientales que viven de su trabajo y quieren la libertad, a luchar ahora para: Organizar a todos los niveles la resistencia contra la dictadura (...)

Derrocar y someter a juicio del pueblo a la camarilla cívico-militar y su presidente de turno, culpables de crímenes de lesa nación, por atentar contra las libertades, la dignidad, la vida, la economía, la independencia del pueblo y de la patria; así como a los grupos económicos que apoyan a la patota en el poder y se favorecen con su política.

Constituir un gobierno provisorio integrado por representantes de todas las fuerzas políticas y sociales y de todos los orientales, civiles o militares, que hayan luchado contra la dictadura...” (Trías; 2008: 166).

Luego del congreso fundacional, los militantes del PVP continuaron con sus esfuerzos en pos de llevar a cabo lo que se habían propuesto en su programa. De esta forma, desde mediados de 1975 hasta comienzos de 1976, el PVP intentó desarrollar la “campana de Alejandra”, consistente en reestablecer los vínculos con militantes sindicales residentes en Uruguay, quienes fueron invitados a Buenos Aires a participar en las discusiones de los documentos fundacionales

⁶Op. cit. Págs. 4-5.

⁷Op. cit. Págs. 4-5.

del Partido. El traslado y el retorno a Uruguay, así como los lugares de reunión y discusión en Argentina, se realizaron bajo normas de clandestinidad.

Mientras tanto, en Chile se terminaba de cerrar el acuerdo que pondría en marcha la máxima expresión en lo que a coordinación represiva regional se refiere: la Operación Cóndor. De acuerdo a lo que se desprende del acta de clausura, la reunión en donde quedó sellada la represión transnacional se desarrolló entre el 25 de noviembre y el 1ro de diciembre de 1975 en Santiago de Chile con la participación de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. A pesar de la existencia de “acuerdos de caballeros” o entendimientos bilaterales, con Cóndor se forjó “una red multilateral de inteligencia institucionalizada, extendida y permanente. Para ello se montó una infraestructura burocrática y de comunicaciones con tecnología avanzada que tuvo por sede Santiago de Chile y, casi con certeza, en un segundo momento, Buenos Aires” (Garzón; 2016: 83).

Para llevar adelante esta maquinaria se requerían de tres fases: 1) intercambio de información entre los servicios de inteligencia policiales y militares para conformar un banco de datos que permitiera coordinar la vigilancia sobre aquellos sujetos considerados “subversivos”; 2) la conformación de equipos multinacionales parapoliciales y paramilitares que espieran, detuvieran, torturaran, interrogaran, trasladaran, asesinaran o desaparecieran a los objetivos señalados; 3) atacar destacados dirigentes políticos que pudieran influir en la opinión pública internacional en contra de los regímenes militares (Garzón; 2016: 85).

Las acciones principales que se llevaron a cabo dentro del marco de esta asociación ilícita fueron: intercambio de informes de inteligencia obtenidos a partir de torturas, pedidos de detención transfronterizos, formación de equipos multinacionales para atacar a los objetivos, colaboración de grupos paramilitares con las fuerzas estatales para encubrir el accionar ilegal, entregas bilaterales y traslados encubiertos de prisioneros, creación de centros clandestinos de detención, campañas de desinformación y guerra psicológica, apropiación de niños, ejecuciones sumarias y desapariciones (Garzón; 2016: 83-84).

De esta forma, Cóndor resultó ser un complemento de la represión estatal que las Fuerzas Armadas del Cono Sur ejercían en sus respectivos territorios nacionales. Ya que se encargaba de perseguir, secuestrar, torturar y eliminar a aquellos exiliados que escapaban de la represión que desataban las dictaduras en sus países.

De los países que firmaron el acuerdo que institucionalizó a Cóndor, el único que se encontraba en democracia en ese momento era Argentina. A causa de esto, terminó siendo el destino elegido por los exiliados para refugiarse de la represión. Sin embargo, esto pronto se constituyó en una trampa mortal: el 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado en Argentina. Dando lugar a un régimen que llevó adelante un plan sistemático de represión basado en el Terrorismo de Estado, el secuestro y la desaparición de personas como *modus operandi*. Esto supone un cambio significativo en lo que respecta a metodologías represivas para aplicar sobre los blancos seleccionados.

En Uruguay, tal como afirma el Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay y coordinador de la Investigación Histórica sobre los detenidos-desaparecidos, Álvaro Rico: “a diferencia de las dictaduras en los países vecinos que aplicaron un sistema de terror asentado fundamentalmente en los asesinatos de opositores y la desaparición forzada de personas-, la estrategia represiva central del régimen cívico-militar uruguayo fue el encierro masivo y prolongado de cerca de 6.000 hombres y mujeres en alrededor de 50 establecimientos carcelarios y cuarteles y cerca de 9 centros clandestinos de reclusión” (Scocco; 2010: 164).

Es entre fines de 1975 y 1978 que las desapariciones adquieren forma masiva en Uruguay. Prosiguiendo con lo expuesto por Rico, el fenómeno de la desaparición forzada de personas y el carácter colectivo que asumió, “marca un cambio sustancial en la caracterización y periodización del régimen dictatorial e inaugura la etapa de abierto terrorismo de Estado en Uruguay” (Scocco; 2010: 164).

De esta manera, según la Investigación Histórica sobre los detenidos-desaparecidos y asesinados políticos, el 9 de junio, en un departamento ubicado en el barrio de Nuñez, fueron secuestrados y detenidos por la Policía Federal, Gerardo Gatti y María del Pilar Nores. El departamento se utilizaba como una oficina del PVP. Pilar Nores fue trasladada a una dependencia de la Policía Federal. A partir de la información obtenida, la Policía Federal Argentina comunicó a oficiales uruguayos que los detenidos eran de esa nacionalidad, y que formaban parte del PVP, así como que uno de ellos era el dirigente requerido por las Fuerzas Conjuntas, Gerardo Gatti. Desde este momento, los servicios de inteligencia -el Servicio de Información de Defensa (SID) uruguayo y la Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) argentina- comenzaron a actuar de manera conjunta.

Luego de la caída de Pilar Nores y Gerardo Gatti, quienes habían sido trasladados al centro clandestino de detención Automotores Orletti, fue detenido a fines de junio de 1976 Enrique Rodríguez Larreta Martínez, quien fue conducido a la Jefatura de la Policía Federal y luego trasladado el 6 de julio a Orletti. Tres días después, se produjeron las detenciones de Cecilia Irene Gayoso y Mónica Soliño. Entre el 13 y 14 de julio se llevaron a cabo diecinueve detenciones en pocas horas: Margarita Michelini y Raúl Altuna, Ana Inés Quadros y Eduardo Dean, Víctor Lubian, Marta Petrides, Sergio López Burgos, León Duarte Luján, Enrique Rodríguez Larreta (padre), Raquel Nogueira Paullier, José Félix Díaz Bayardes, Laura Anzalone, Ana María Salvo Sánchez, Ariel Soto, Elba Rama Molla, Gastón Zina Figueredo, Alicia Raquel Cadenas Ravela, Sara Méndez y Asilú Maceiro, todos ellos pertenecientes al aparato político del PVP. Las detenciones fueron realizadas, según testimonios de las víctimas, en operativos conjuntos en los que participaron miembros de las fuerzas de seguridad de Uruguay y Argentina.⁸

Remitiéndonos a los testimonios de Ana Inés Quadros y Sergio López Burgos en el marco de la causa Plan Cóndor-Automotores Orletti II, se puede reconstruir la coordinación argentino-uruguaya. De acuerdo a lo expuesto por Quadros: “Estamos en Automotores Orletti 11 días, ahí el régimen es casi permanente, interrogatorios y torturas (...) Quiero decir que ahí había oficiales uruguayos y argentinos.- Los uruguayos eran Nino Gavazzo, Cordero, Gilberto Vázquez, el “Turco” Arab, y Pedro Mattos, son los que yo recuerdo estando en Argentina en Automotores Orletti...”⁹ Mientras que López Burgos narró: “el 13 de julio de 1976 fui detenido junto con León Duarte en una confitería en la calle Boedo y Carlos Calvo (...) Me detiene Cordero, Gilberto Vázquez, y soldados uruguayos como el “Negro Kimba” y el “Flaco Mauricio (...) En Orletti me torturó directamente Cordero entre otros, me desnudaron arriba, yo ví además cuando Cordero violaba a Ana Quadros arriba de una mesa, también me torturó el “Pajarito Silveira...”¹⁰

⁸Ver: Actualización de la investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, Sección sobre fichas personales de detenidos desaparecidos, Argentina.

⁹Testimonio de Ana Inés Quadros en la causa Plan Cóndor-Automotores Orletti II llevada adelante por el Tribunal Oral en lo Federal Nro. 1.

¹⁰Testimonio de Sergio López Burgos en la causa Plan Cóndor-Automotores Orletti II llevada adelante por el Tribunal Oral en lo Federal Nro. 1.

De acuerdo a los testimonios de las víctimas, los interrogatorios a los que fueron sometidos giraban en torno al dinero¹¹ que poseía la organización y al paradero de la bandera robada de los “33 Orientales”. Los oficiales uruguayos tenían en su poder un organigrama detallado del funcionamiento, estructura y militantes del PVP.

Todos los detenidos fueron conducidos a Automotores Orletti, un taller mecánico ubicado en Venancio Flores 3519/21 de Capital Federal, que funcionó como centro clandestino de detención desde 11 de mayo de 1976 hasta noviembre del mismo año, siendo clausurado por la fuga de los detenidos argentinos Graciela Vidailiac y José Morales.

El nombre formal de Orletti era la base de Operaciones Tácticas 18 (OT 18). Se encontraba bajo el mando del Primer Cuerpo del Ejército (dado que las Fuerzas Armadas habían dividido en zonas el territorio para llevar a cabo la represión) y su estructura organizativa estaba compuesta de la siguiente manera: “(...) como los restantes sitios de esta naturaleza, poseía una estructura vertical, detectándose en este caso, un “Jefe” del personal argentino, representado por Aníbal Gordon; y un Jefe funcional, bajo la órbita de quien funcionaba el centro de detención, representado por el Coronel del Ejército Argentino Otto Carlos Paladino, entonces titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Por debajo de tales mandos, se encontraba el grupo integrado por personas de diversas procedencias que conformaban los llamados “grupos de tareas” -o también llamados “patotas”- los cuales eran los encargados, en primer término, del secuestro y traslado al “centro” de los ilegalmente detenidos; a la vez que el rol de los integrantes de las “patotas” muchas veces se completaba con los interrogatorios y torturas que se realizaban en los centros clandestinos de detención; y por último, las fracciones de “guardias” que se encargaban de custodiar a los detenidos.”¹²

Prosiguiendo con el relato, el 24 de julio de 1976 los detenidos fueron trasladados clandestinamente en un vuelo especial (también conocido como “primer vuelo”), ordenado por el SID y conducido por pilotos de la Fuerza Aérea uruguaya. Al llegar a Montevideo, los prisioneros fueron llevados al centro de detención ubicado en la casa de Punta Gorda. Como parte de una operación de la dictadura uruguaya para no perder el financiamiento militar otorgado por Estados Unidos a causa de las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos, se llevó a cabo una puesta en escena en donde los militantes del PVP debían aparecer como miembros de una organización guerrillera que invadía Uruguay y resultaban detenidos por las fuerzas de seguridad. A esta acción se la conoció como Operación Chalet Susy o Shangrilá, por el lugar en donde se produjo la supuesta detención en la costa uruguaya. Como resultado, las mujeres fueron encarceladas en el penal de Punta Rieles, mientras que los hombres en los penales de Libertad y Punta Carretas. Pero la represión no terminó allí.

Durante septiembre y octubre de 1976 se llevó adelante, en Buenos Aires, la segunda oleada represiva contra el aparato del PVP y la detención de los militantes que todavía se encontraban en dicha ciudad.

La secuencia de los secuestros indica la existencia de una coordinación represiva regional. El inicio de la misma se puede situar el día 23 de setiembre de 1976, cuando fueron detenidos

¹¹En marzo 1974 se llevó a cabo en Argentina el secuestro del empresario holandés Federico Hart (exportador lanero con negocios en Montevideo y Buenos Aires). Distintas fuentes coinciden en que el monto del rescate fue de 10 millones de dólares.

¹²República Argentina. Secretaría Nro. 6 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3, Causa nro. 2637/04 caratulada “Vaello, Orestes Estanislao y otros s/ privación ilegal de la libertad agravada”. Juez Federal Daniel Rafecas. Causa “Automotores Orletti”, disponible en formato digital en el Archivo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz).

Juan Morales von Pieverling y Josefina Keim Lledó de Morales, ambos desaparecidos. Tres días más tarde, son detenidos y desaparecidos: Mario Roger Julián y Victoria Lucía Grisonas de Julián; sus dos hijos son secuestrados: Anatole Boris de 3 años y Victoria Eva de un año y medio de edad. El mismo día, 26 de setiembre, fueron detenidos Adalberto Soba y su mujer, Elena Laguna junto a sus hijos. También se produjo la detención de Alberto Mechoso en un bar de Buenos Aires donde había concertado una cita con Soba. Ambos permanecen desaparecidos. Dos horas después del arresto de ambos, allanaron el domicilio de Mechoso en busca de dinero del PVP, lugar donde fueron secuestrados su mujer, Beatriz Castellonense, y sus dos hijos, Beatriz Elizabeth de 9 años y Alberto José de 6 años de edad. En la tarde se produjo la captura de Raúl Tejera Llovet y de Juan Pablo Errandonea, ambos también desaparecidos.¹³

El 5 de octubre de 1976, en un vuelo aéreo clandestino realizado a solicitud del SID y piloteado por personal de la Fuerza Área Uruguaya, fueron trasladados a Montevideo presumiblemente los militantes del PVP que se encontraban recluidos en Automotores Orletti. Los integrantes de este grupo de uruguayos -alrededor de 26 personas- siguen desaparecidos.

El tercer momento represivo involucra a Paraguay. Ya que entre los integrantes del PVP que no fueron atrapados en los operativos de Buenos Aires, se encontraban Gustavo Inzaurrealde y Nelson Santana, quienes viajaron a Paraguay en busca de documentación falsa que permitiera la salida de militantes que aún se encontraban en la Argentina. Ambos permanecieron detenidos por aproximadamente dos meses en Paraguay. El 16 de mayo de 1977 son trasladados a Buenos Aires junto con argentinos: Marta Landi, Oscar Logoluso y José Nell. Todos permanecen desaparecidos hasta la fecha. Se cree que Gustavo Inzaurrealde pudo haber pasado por un centro clandestino de detención en Argentina, denominado “Club Atlético”.

Por otra parte, en Argentina, en abril de 1977, se produjeron los secuestros de dos ciudadanos uruguayos vinculados al PVP: Jorge Felisberto Gonçalves Busconi y Andrés Bellizzi Bellizzi.

La represión contra los miembros del PVP tuvo una cuarta etapa que, a los fines de este trabajo, no abordamos aquí. Se trató de la detención ilegal de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez en Porto Alegre y su traslado ilegal a Montevideo.

Palabras finales

Consideramos que recuperar y analizar la historia de una organización política, que posee muchas particularidades, como la del Partido por la Victoria del Pueblo, nos permite repensar y complejizar no sólo la cuestión de la coordinación represiva, sino también la década de 1970 misma en varios aspectos.

En primer lugar, la represión contra los militantes del PVP es un modelo en cuanto a las características de las acciones realizadas y sus participantes: actuación de fuerzas paraestatales en conjunto con las estatales, redadas nocturnas y asalto de los domicilios,

También pone de manifiesto dos tipos de delitos que escapaban a los supuestos objetivos de las fuerzas contrainsurgentes: el secuestro y apropiación de niños, y una debilidad particular por el robo, la extorsión y la estafa.

Asimismo interpela la denominada “Teoría de los dos demonios” consagrada en el Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en donde se hace referencia a la convulsión sufrida, en Argentina y en otros países, por un terror proveniente tanto de izquierda como de derecha (Nunca Más; 2013). Poniendo en cuestión que la Operación

¹³Ver: Actualización de la investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, Sección sobre fichas personales de detenidos desaparecidos, Argentina.

Cóndor haya surgido en respuesta a una estructura de coordinación subversiva marxista, la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR).

Esta última había surgido en 1972 en Santiago de Chile (en el mismo lugar, tres años antes que Cóndor) fruto de reuniones entre las cúpulas del PRT-ERP argentino, el MIR chileno y el MLN-T uruguayo, acordaron crear una coordinadora regional al estilo de lo expresado por el “Che” en la Conferencia Tricontinental, realizar una declaración conjunta, crear una revista política y formar una escuela de cuadros.

Sin embargo, nunca significaron un problema para las dictaduras en términos militares. De hecho cuando cada una de ellas usurpó el poder, estas Organizaciones Político-Militares ya estaban derrotadas.

Por ello, la operación contra los militantes del PVP constituye una de las evidencias más fuertes contra la interpretación que sugiere que la Operación Cóndor fue una reacción dirigida especialmente contra la Junta Coordinadora Revolucionaria, dado que el PVP no fue miembro de la misma. En ese sentido, refuerza la hipótesis de que el fantasma de la JCR fue exagerado para justificar y legitimar la represión transnacional frente a la opinión pública y al interior de las propias cadenas de mando de las fuerzas represivas del Cono Sur.

Dado que el presente proyecto se enmarca en el campo de la historia reciente y los estudios sobre coordinación represiva en el Cono Sur, podemos estimar que todavía hay aspectos que ameritan reflexión acerca de la década de 1970. De esta manera, consideramos que la investigación a llevar adelante puede realizar aportes al campo de las ciencias sociales y a la sociedad en general.

Erigiéndose como una herramienta que permita contraponer la memoria frente al olvido. En otras palabras, que el producto de esta investigación recorra no solamente los ámbitos académicos, sino también las distintas esferas de la sociedad, para que la misma se aproxime a ese pasado, pueda reconstruir el fenómeno de coordinación represiva en la década de 1970 a través de este estudio de caso y reflexione sobre la importancia de la integración regional latinoamericana, no a partir del desarrollo de dispositivos represivos cada vez más sofisticados entre países para eliminar a aquellos considerados como “subversivos” para el orden establecido, sino desde una instancia superadora que vertebré ejes fundamentales, y que uno de ellos sea el de los Derechos Humanos.

Bibliografía

- Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica (2012). *América Latina, la construcción del orden: de las sociedades de masas a las sociedades en procesos de reestructuración*. Buenos Aires, Ariel.
- Broquetas San Martín, M. (2013). *Demócratas y nacionalistas: La reacción de las derechas en el Uruguay (1959-1966)*. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, (2013). *Nunca Más: informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*. 8ª ed. Buenos Aires, Eudeba.
- Garzón Real, Baltazar, (2016). *Operación Cóndor. 40 años después*. Buenos Aires, Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) Categoría II UNESCO.
- Presidencia de la República Oriental del Uruguay (2007). *Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos*. En cumplimiento del Artículo 1º de la ley 15.818, Montevideo. Presidencia de la República y Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales.
- Scocco, Marianela (2010). “*Las estrategias represivas en las dictaduras militares de los años setenta en el Cono Sur. Los casos de Uruguay, Chile y Argentina*”, en *Historia Regional*, Sección Historia, ISP N° 3, Año XXIII, N° 28, pp. 155-176.

Trías, Ivonne (2008). *Hugo Cores: pasión y rebeldía en la izquierda uruguaya*. Montevideo, Trilce.

Trías, Ivonne y Rodríguez Díaz, Universindo (2013). *Gerardo Gatti: revolucionario*, 2ª ed., Montevideo, Trilce.

Yaffe, Jaime, Dictadura y neoliberalismo en Uruguay (1973-1985). Ponencia remitida para ser presentada en las Séptimas Jornadas de Historia Económica. Asociación Uruguaya de Historia Económica, Montevideo, 3 y 4 de agosto de 2010.